

MOMENTO EMPRESARIAL

Alfonso Tulla

Matildes decepcionadas

Quizás haya que empezar esta crónica mensual con lo que ha sido la noticia financiera de noviembre: Telefónica, la primera empresa del país por facturación, no repartirá dividendo con cargo a este ejercicio a pesar de haber ganado más de 220.000 millones de pesetas en el mismo. La explicación oficial de la compañía que preside Juan Villalonga es que Telefónica tiene que "guardarse las espaldas" en las copiosas inversiones iberoamericanas –en especial, Brasil– y destinar fondos a sus futuras aventuras en Marruecos e Italia, además de acometer un nuevo ajuste de plantilla.

En un santiamén, el anuncio dejaba desplumados del dividendo con cargo a la rentabilidad del presente ejercicio, a sus 1,2 millones de accionistas, A cambio, y como premio de consolación, se propondrá a la Junta General el reparto de una acción gratis por cada 50 antiguas, con cargo a las reservas de la compañía.

Coincidiendo en fecha con este anuncio del ingeniero financiero Juan Villalonga, 48 horas posterior a la difusión de los resultados del tercer trimestre que escondían datos preocupantes –negocio estancado, margen negativo–, ha ocurrido que la agencia de calificación Standard & Poor's le ha bajado el rating crediticio corporativo a largo plazo, porque pierde cuota de mercado e ingresos. Aunque también es verdad que en los días siguientes a conocerse la noticia, la cotización bursátil subió notoriamente, lo que puede interpretarse como que ha sido un estímulo para inversores y un varapalo para rentistas.

En el fondo es un enfrentamiento entre dos tendencias de gestión empresarial: una, la clásica de repartir dividendos y, la otra tendencia creciente en todo el mundo y bautizada como "creación de valor", orientada a fortalecer la es-

tructura de capital de la empresa para garantizar un mejor desarrollo. Y esta última, aunque a nivel de debate teórico esté muy razonada, al pequeño accionista –que no es el que mueve la cotización en el parquet– siempre le va a generar el resquemor de que, por primera vez en la historia, las Matildes (que así se conocía a las acciones de Telefónica en tiempos) no repartan sus buenos duros, como justa retribución de los ahorros invertidos.

Otro tema que también anunció el presidente de Telefónica es que se destinará otra cifra astronómica, casi 300.000 millones de pesetas, a financiar una reducción de plantilla de 30.000 personas por medio de las bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias acordadas.

Nos vuelve a llamar la atención cómo una empresa, hasta hace un año con dominio público, se permita jubilar a los 55 años con el coste económico (ya se conoce) y social que ello implica. Como ha hecho observar alguien, si el astronauta John Glenn ha podido volar por el espacio a sus 77 años con eficacia y rendimiento, no debiera haber tanta precipitación en desplazar a los mayores a la improductividad.

Una, dos y tres

En un principio fue Telefónica. En 1998 se acabó el monopolio con Retevisión, que trajo la libertad al mundo del teléfono y, ahora, se acaba el duopolio y empieza la verdadera competencia. O al menos así se presenta el tercer operador de telefonía fija, Uni2, que empezará a prestar servicio el 1 de diciembre, con la promesa de que "vas adorar el teléfono".

Según ha dicho en su presentación, además de ser más barata que la competencia, no cobrará nada por establecer la llamada, ofrecerá precios especiales a las empresas y exten-

derá para los particulares la tarifa reducida de fin de semana a tres días (viernes, sábados y domingos). Además y este punto tiene su gracia para el usuario, enviará un aviso al cliente que incluirá un detalle de las llamadas antes de cobrarles la factura. Transparencia y sencillez son buenas armas para ganar al público.

Mientras Uni2 rompe el mercado de precios, el Ministerio de Fomento y el Ente Público correspondiente han anunciado que van a proceder a la enajenación del 30 por ciento de Retevisión, el segundo operador de telefonía fija en España y propietario del 40 por ciento de Retevisión Móvil, que es el operador adjudicatario de la tercera licencia de telefonía móvil de ámbito nacional (es decir, detrás, cronológicamente, de Telefónica Móviles y de Airtel).

A esta oferta golosa van a concurrir varios de los accionistas actuales de Retevisión, que tienen claro que, aunque en España la telefonía móvil genera ya unos ingresos de 1,3 billones de pesetas anuales, nuestro país presenta todavía la tasa de penetración más baja de Europa, con sólo 15 usuarios del móvil por cada cien habitantes.

La llegada del tercer operador de la telefonía móvil puede volver a desatar estas Navidades la guerra de los terminales, ya que los operadores siguen basando gran parte de su estrategia comercial en las subvenciones a los aparatos. Por si no lo sabían, el comerciante recibe unas 20.000 pesetas de subvención –dependiendo del modelo– por cada alta que consigue, cantidad que él descuenta al comprador final. Esta mecánica tiene dos consecuencias: que las subvenciones llevan aparejada la esclavitud del terminal, que, debido a un candelero electrónico, sólo puede usarse con el operador que ha dado la subvención y, la segunda, que si uno sólo quiere cambiar el aparato, para hacerse con otro más moderno (de tamaño, autonomía, etc.) sin darse de baja en su contrato, tiene que pagar el precio real del mismo, que puede ser el triple de caro que las ofertas. Pero el binomio subvención=esclavitud (fidelidad) no se quebrará hasta que no se elimine el primer factor.

Remodelación mutualista

La anunciada fusión de Fraternidad y Muprespa–Mupag, dos importantes mutuas de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, significa el nacimiento de la tercera entidad del sector e implica una remodelación del mapa mutualista, cuyo proceso de concentración ya ha sido muy intenso en los últimos años.

La que, bajo el nombre de Fraternidad–Muprespa, será la tercera entidad del ramo, con unos ingresos de 75.000 millones de pesetas, se coloca detrás de las compañías Fremap y Asepeyo, controlando entre las tres el 50 por ciento de las cuotas de accidentes de trabajo que se reparte este sector y que, en 1997, alcanzaron los 700.000 millones de pesetas.

La prevención de riesgos laborales es un asunto de máxima actualidad, porque existe una necesidad imperiosa de luchar contra los accidentes de trabajo. Tan sólo en lo que llevamos de año se han producido 1,2 millones de accidentes de trabajo, de los cuales 600.000 causaron baja del trabajador, y 1.200 fueron mortales, lo que supone una media de cuatro muertos al día, 12.000 accidentes graves y el resto leves.

Ante este escenario de siniestralidad laboral en España, superior al de nuestro contexto europeo, durante los próximos años las empresas debieran prestar una mayor atención a la seguridad y a la salud en el trabajo (el término higiene ya quedó en desuso), tanto por exigencias de la Unión Europea, como por consideraciones de política social. En este sentido, la Administración que, sigilosamente va fomentando el proceso de concentración, debiera incentivar a las empresas con estímulos fiscales para promover la renovación de equipos y utillajes o, con efectos de cotización a la Seguridad Social, para premiar –o penalizar– el menor o mayor número de accidentes en una misma empresa.

Volviendo a la nueva entidad resultante, anotar que, cuando entre en funcionamiento la nueva Fraternidad, a primeros de enero próximo, protegerá, con 1.500 empleados –incluyendo personal sanitario– y 120 delegaciones y centros asistenciales, a un colectivo de 1,4 millones de trabajadores, correspondientes a 240.000 empresas asociadas.

Astilleros varados

La situación de los astilleros públicos es

preocupante por las desviaciones sobre las previsiones, según reconoció en el Parlamento y en rueda de prensa después del Consejo de Ministros, el titular de Industria Josep Piqué.

La paralización de la demanda internacional de barcos y unos precios que no cesan de caer como consecuencia de la devaluación del won coreano, impiden que el grupo empresarial de Astilleros Españoles, que sólo tiene trabajo para un año, consiga nuevos contratos.

Esta empresa dependiente de la SEPI y que agrupa, en forma de filiales, a todos los astilleros públicos con varios centros de trabajo con problemáticas particulares diferentes, tenía en vigor un Plan Estratégico de Competitividad (el PEC) que había permitido la supresión de casi 4.000 empleos y la mejora de la eficacia, con mayor especialización y una mayor agresividad comercial, además de recibir unos 200.000 millones en ayudas públicas.

Pero no ha sido suficiente. La confluencia de las dos circunstancias que se mencionan ponen a toda la industria naval europea ante un grave problema de no fácil solución. Sobre todo si se tiene en cuenta que el año 2000 es el último en el que, según las directrices comunitarias, los gobiernos pueden subvencionar la construcción de buques con una ayuda del 9 por ciento del valor de la nave, un mecanismo que fue prorrogado ahora por dos años más.

La presidencia de Astilleros Españoles piensa que como la crisis de los astilleros es un problema europeo una línea de posible solución podría estribar en frenar continentalmente el expansionismo y las prácticas de dumping de países del Extremo Oriente como Corea y Japón.

En cualquier caso, la prudencia aconseja, en especial a autoridades como el ministro de Industria, no empezar a hablar de regulación de plantillas, porque no sólo excita el celo sindical, sino que afecta a las prácticas de trabajo con el lógico descenso de productividad, que sólo podría agravar la delicada situación.

El mercado de futuros

Parece fuera de discusión que uno de los sectores empresariales más afectados y más pronto por la implantación del euro y el comienzo de la tercera fase de la Unión Monetaria Europea (UME) será el mercado bursátil, que acaba de estrenar una Ley de Reforma para adaptar nuestra normativa a la directiva de servicios de inversión (DSI) de la Unión Europea.

Como se sabe, desde el próximo lunes 4 de enero de 1999 todas las Bolsas de valores de los países miembros pasaran a cotizar sus precios en la nueva moneda única y esto también ocurrirá, paralelamente, en los mercados financieros de derivados.

En consecuencia, se va a producir una verdadera convulsión que obliga a mercados y empresas a posicionarse en el nuevo contexto. De ahí que no sea nada raro que la bolsa de Madrid haya decidido sumarse al proyecto de bolsa única europea, liderado por Francfort y Londres, y que será el segundo mayor mercado del mundo después de Wall Street, y que otros mercados organizados, como son los de futuros y opciones, estén buscando o afianzando alianzas estratégicas para superar el proceso de concentración en marcha, como ha hecho el MEFF de Renta Fija con su homólogo francés el MATIF, para impedir el avasallamiento del germano DTB.